

**El protagonismo de la rama judicial en la resolución de la Crisis económica de Puerto Rico.
Gerardo Carlo -Altieri. Puerto Rico**

Actividad judicial: frecuencia y jurisdicción

- Un día después de firmarse la ley estableciendo un sistema de resolución de deuda puramente local, un grupo de bonistas inicio el primer litigio para declarar dicha ley inconstitucional ante cortes federales.
- Luego de firmarse la ley del Congreso conocida por “PROMESA” se siguen presentando demandas en corte federal del distrito judicial de Puerto Rico, en cortes locales y en el distrito de Nueva York.
- Las bases jurisdiccionales para los casos federales es la constitución de EEUU: violaciones a clausulas sobre debido proceso de ley (“dueprocess”), “takingsclause” o “impairment of contract”.
- También se utilizó muy efectivamente la doctrina de “preemption” o campo ocupado por el congreso, y se ha discutido en estos casos la cláusula territorial de la constitución y el requisito de uniformidad en cuanto a leyes de quiebra.

Franklin/ Oppenheimer v. ELA – ley núm. 71 de 2014

- Demanda para invalidar sistema de resolución de deuda publica llamada ley de “quiebra criolla”
- Ley 71 - sistema de resolución de insolvencia para algunas agencias del gobierno de PR, justificándose por estar excluido el ELA del Chap. 9 (US BankruptcyCode) desde 1984.
- El Supremo de EEUU la declara inconstitucional por estar el campo ocupado “preemption” / el Congreso ocupo el campo al excluir a PR en 1984 de la protección del Chap. 9.
- Debido proceso, cláusula de contratos, igual protección y cláusula de uniformidad de “bankruptcy” no se decide.

Assured Guarantee...v. García Padilla cv01037

Bonistas cuestionan el desvío y uso de fondos de reserva destinados para el pago de bonos asegurados por orden ejecutiva del Gobernador en 2015 – bajo cláusulas de desvío o “claw backs” incluidas en los contratos de emisión.

Incluye como demandantes las aseguradoras de bonos.

No cuestionan si la cláusula de desvío es válida, sino que ELA puede desviar fondos de garantía al pago de obligaciones de menor prioridad, en especial cuando tiene otros fondos disponibles.

LexClaims LLC, Jacana...V. García Padilla 3:16cv 02374

Caso cuestiona actuaciones del Ejecutivo de PR en el periodo inicial (pre nombramiento de Junta) PROMESA

Se alega violación a sec. 204 (c) (3) - transferencia de fondos ilegalmente al asignar dinero en presupuesto para fines “no esenciales” (\$2.5M para operar la oficina de la primera dama, fondos para atletas de alto rendimiento, fondos para pensiones etc.).

Wal-Mart v. Zaragoza, 15-CV 03018 (2015)

Declara inconstitucional ley núm.72-2015 que impuso a negocios que importan mercancía, una tributación de 6.75% cuando sus ventas pasan de \$2.75 billones (US)

Importante - primera vez juez federal encuentra que el GDB esta insolvente

Se usa tal conclusión "a caballo" para sustentar la demanda de los bonistas en otros casos

Brigade Leveraged v. GDB 16-cv-1610 (2016)

- Se acusa ELA de "canibalizar" fondos de agencias y trasferir activos estando en estado de insolvencia,
 - Se cuestiona el desvío y uso de fondos del GDB bajo la teoría que se hicieron pagos a otros bonistas menos prioritarios y se trata de "preferencias" indebidas,
 - Se utiliza la determinación de insolvencia del juez en el caso Wal-mart,
 - Se alega que la ley que crea GDB prohíbe este tipo de transferencia cuando la agencia esta insolvente.
 - Litigios locales
 - En septiembre 2016:
- 1) Unos 31 grupos de inversionistas en sistemas de retiro del ELA demandan al gobierno de PR para obligar que los fondos de aportaciones de empleados se depositen en cuentas separadas.
 - 2) Scotiabank, ignorando la moratoria declarada, inicio la primera demanda bancaria contra el gobierno en cobro de deuda de \$38M (US), por impago desde 2015.
 - 3) El Administrador del Sistema de Retiros se une a demanda contra UBS comenzada en 2011 y pide se responsabilice por perdidas a UBS y MesirowFinacial.

Aurelius Capital y otros v. ELA

- En julio 2016 seis grupos de tenedores de bonos GO's demandan alegando que el ELA viola la ley PROMESA al legislar localmente para transferir fondos o activos "fuera del curso ordinario del negocio" y transferencias que resultan incongruentes con la constitución o leyes del Territorio.
- Se alega violación a la sec. 204 (c) (3) y que la moratoria que declaró el gobernador por orden ejecutiva y por Ley 21 es ilegal.
- Aurelius Capital es un fondo "buitre" que mantuvo un papel importante en el litigio contra Argentina.

Litigios sobre la paralización de "PROMESA"

- El propio ELA pide que suspendan los procedimientos en pleito Amvac v. Autoridad de Carreteras; alegando que la paralización, protege contra cualquier pleito por los bonistas.
- El tribunal emite opinión parcial en casos Amvac, Assured y Finacial: la paralización (sec 562) de PROMESA prohíbe acciones para cobrar sus acreencias pero no paraliza acciones para cuestionar la ley propiamente. Se permite continuar el litigio que alega ilegalidad de los "clawbacks" y ley de moratoria.
- En BrigadeLeverage v. ELA son los bonistas que acuden al tribunal para que se determine que la paralización que provee PROMESA no les aplica.

Participación de la junta de control en litigios

- NationalPublic, Brigade Capital, US Bank Trust y bonistas individuales han instado cuatro demandas para declarar la ley de moratoria de abril de 2016 inconstitucional.
- Los Demandantes en 7 de octubre solicitan una declaración judicial de que la paralización de ley Promesa no les impide continuar con sus litigios porque no son acciones “en cobro” de deuda
- El gobierno se opone y solicita la intervención de la Junta de Control para proteger al Estado de los cuatro litigios

La Junta solicita al tribunal 14 días para presentar su posición.